



Juicio No. 09281-2022-02621

JUEZ PONENTE: VIERA ENCALADA NEBEL FABRICIO, JUEZ

AUTOR/A: VIERA ENCALADA NEBEL FABRICIO

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.

Guayaquil, martes 13 de agosto del 2024, a las 22h15.

VISTOS: Habiendo concluido las intervenciones orales de las partes procesales, en la Audiencia Preparatoria del Juicio y Formulación de Dictamen Fiscal en la presente causa penal, el señor Abg. Juan Carlos Teran Moreno, Juez De La Unidad Judicial Penal Norte 1 Florida, Con Sede En El Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en base al dictamen Fiscal Acusatorio; con fecha Guayaquil, Viernes 2 de Diciembre del 2022 a las 10h00 emitió oralmente el Auto de Llamamiento a Juicio en contra de los Procesados **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL y JEYCOL GUILLERMO PONCE POSLIGUA**, del delito de **ROBO**, tipificado en el Art. 189 inciso 1 en el Grado de **AUTORES** de conformidad con el Art. 42 numeral 1 literal a) del Código Orgánico Integral Penal quienes se encuentran **LIBRES con medidas alternativas la Prisión Preventiva Art. 522 numeral 1**. Prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe y en virtud de no comparecer a la Audiencia de Juicio e incumplimiento de las medidas alternativas se convocó la audiencia de revisión de medidas y se ordeno la prisión preventiva en contra **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL** que se encuentra **PRESO** en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley No. 1 Guayaquil, por otra causa se giro la boleta de Encarcelamiento en cumplimiento de la **PRISIÓN PREVENTIVA** que por dicho delito pesa en su contra; en cuánto al procesado **JEYCOL GUILLERMO PONCE POSLIGUA**, se dispuso **la localización y captura del mencionado procesado, a fin de asegurar su comparecencia ante el Tribunal, sin perjuicio de los derechos que le asistan a las partes procesales su derecho a la impugnación.- SE SUSPENDE LA ETAPA DE JUICIO, hasta que el procesado JEYKOL GUILLERMO PONCE POSLIGUA se entregue voluntariamente o sea capturado.** Teniendo como antecedente para dictar el mencionado Auto de Llamamiento a Juicio, la resolución de Instrucción Fiscal iniciada dentro de la Audiencia Oral de Formulación de Cargos, en contra del referido acusado, y demás constancias que obran del proceso. Ejecutoriado por el Ministerio de la Ley el Auto de Llamamiento a Juicio, fue remitido con el objeto de que se avoque conocimiento y se sustancie la etapa del juicio luego del Sorteo de ley quedando integrado el Tribunal y puestas en conocimiento las partes procesales de la recepción del Auto Llamamiento a Juicio; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 562 inciso primero, 563 y 609 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, se llevó a cabo la Audiencia de Juicio Oral; conforme consta dentro de autos se convocó conforme consta dentro de autos y se concluyó la misma, **aclarando que por existir causas pendiente de resolver del Pool de Jueces la Coordinación de Audiencia nos indica fecha para la instalación y reanudaciones dando prioridad a los casos donde se encuentran personas privadas de la libertad y con riesgo de caducidad de la Prisión Preventiva de acuerdo a las directrices del Consejo de la Judicatura y los días Miércoles, Jueves y Viernes son los días en que se fija fecha para los casos de tribunal fijo** y, siendo el estado del juicio el de dictar Sentencia reducida a escrito, incluyendo una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, conforme lo ordena el Art. 621 del Código Orgánico Integral Penal, por cuanto se ha cumplido en la Audiencia de Juicio Oral, con lo dispuesto en el Art. 618 No. 3 y 619 ibídem, al habersele hecho conocer al procesado oralmente, **LA DECISIÓN JUDICIAL UNANIME** del Tribunal integrado por los Jueces: **ABG. JOSE CAÑIZARES MERA, ABG. EDWIN LOGROÑO VARELA y ABG. NEBEL**

FABRICIO VIERA ENCALADA, quien presidió la Audiencia y redacta la presente Sentencia en calidad de Juez Ponente; sobre los hechos contenidos en la acusación y la defensa, la existencia de la infracción, su culpabilidad y por ende la responsabilidad penal, la individualización de la responsabilidad penal y de la pena de la persona procesada antes indicada, así como la reparación integral de las víctimas; esto es, del delito de **ROBO** tipificado en el Art. 189 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal en el Grado de **AUTOR** de conformidad con el Art. 42 numeral 1 literal a) Ibidem; por lo que, de conformidad con el Art. 76 No. 7 letra l de la Constitución de la República, en concordancia con los Arts. 5 No. 18, 563 No. 5, 622, todos del Código Orgánico Integral Penal, y en armonía con lo que prescribe el Art. 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, es obligación de los juzgadores motivar sus resoluciones; atendiendo este principio y siendo el estado el de resolver se considera: **PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-** La jurisdicción y competencia, que el Tribunal tiene sobre la presente causa se fundamenta en los Arts. 14 No. 1, 15, 16 No.1, 398, 399, 400 No. 1, 402, 403, 404 No. 1, todos del Código Orgánico Integral Penal, y se radica en lo dispuesto en los Arts. 123, 130, 220 y 221 No.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.- **SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-** No obran de autos motivo de nulidad que declarar, estipulado en los Arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con las causas descritas en el Art. 652 No. 10 parte final del Código Orgánico Integral Penal, dado que además se ha respecto los principios contenidos en el Art. 610 ibídem, en virtud de lo cual, al no existir omisión de solemnidad sustancial que pudiera influir en la decisión del proceso; el juicio es válido y así se lo declara.- **TERCERO: ALEGATOS DE APERTURA DE LA FISCALÍA Y DEFENSA: 3.1.-** En la Audiencia de Juicio Oral de la etapa del juicio, el Presidente del Tribunal, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 562 inciso primero, 563 Nos. 4 y 8; y, 612 todos del Código Orgánico Integral Penal, declaró instalada la Audiencia de juicio, una vez verificada la presencia de los sujetos procesales, informando a los procesados de sus derechos determinados en los Arts. 76 No. 7 y 77 No. 7 de la Constitución de la República, y solicitó al señor FISCAL interviniente ABG. NICOLAS PULECIO MONTALVO para que realice su ALEGATO DE APERTURA, quien en lo principal dijo: Respecto a la detención Malavé Peñafiel Alberto Francisco el 4 de Octubre del 2022 según lo manifestado por la policía Nacional indican que alertados por el ECU 911 y encontrándose en circulación por la Av. Francisco de Orellana por la altura del Coral se percatan que están siendo asaltado en ese momento dentro del bus de la línea 62. El conductor de este bus al ver la presencia policial para la marcha y en ese momento vieron que salen a precipitada carrera dos sujetos que posteriormente se los pudo identificar como Malavé Peñafiel Alberto Francisco y Ponce Posligua Jeykol Guillermo. Se los pudo aprehender y al señor como Malavé Peñafiel Alberto Francisco se le encontró entre sus prendas un arma traumática tipo pistola aparentemente 9 milímetros y al otro se le encontró el resto de las evidencias que constan en el proceso tales como varios celulares de diferentes marcas y modelos y varias cédulas de ciudadanía de diferentes personas que eran las que se transportaban en el bus, carteras, bolsos así como billetes de diferente denominación todo esto junto con el arma fue trasladado a las bodegas de la policía Judicial. La fiscalía demostrara en esta audiencia con las pruebas testimoniales y periciales tanto la materialidad como la responsabilidad del hoy procesado. **3.2.- EN SU ALEGATO DE APERTURA, LA ABG. VALERIA SANTILLAN LOPEZ, DEFENSORA PUBLICA DEL PROCESADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL, MANIFESTÓ:** Hemos escuchado atentamente a la fiscalía quien tiene la carga probatoria y deberá demostrar sin lugar a duda que mi defendido es responsable del delito que se le imputa. El señor como Malavé Peñafiel Alberto Francisco goza de su estado de inocencia. **CUARTO: PRÁCTICA DE PRUEBAS DE LA FISCALÍA Y DEFENSA:** Después del alegato de apertura, se ordenó la práctica de las pruebas solicitadas por los sujetos procesales, de conformidad con el Art. 615 del Código Orgánico Integral Penal; por lo que, se lo realizó en el siguiente orden: **4.1.- EN LA FASE PROBATORIA, AL HACER SU EXPOSICIÓN EL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA, EN LO PRINCIPAL DIJO:** “Que se recepten como medio de prueba el testimonio de las siguientes personas: **4.1.1.- TESTIMONIOS DEL SGTO.S DE POLICIA VÍCTOR MANUEL ZAMORA PINCAY, QUIEN REALIZÓ EL INFORME PERICIAL DE**

RECONOCIMIENTO DE EVIDENCIAS, **SGTO.S DE POLICIA DANIEL VICENTE VERA MORALES**, QUIEN REALIZÓ EL INFORME DE INVESTIGACIONES, **CBO.S DE POLICIA BRYAN GEOVANNY BARZALLO CONDO**, QUIEN REALIZÓ EL PARTE DE APREHENSIÓN, **POLICIA SERVICIO PASIVO JIMMY DUVAL RODRÍGUEZ VILLAFUERTE**, QUE REALIZÓ EL INFORME TÉCNICO PERICIAL BALÍSTICO, **CBO.P DE POLICIA JORGE ANTONIO GUERRERO SERNA**, QUIEN REALIZÓ EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, quienes rindieron su testimonio bajo juramento de ley, conforme lo indican los Arts. 454 No. 1, 502 Nos. 12 y 13, 503, 505; y, 615 No. 2 y 5, todos del Código Orgánico Integral Penal. **Y COMO MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES, LA FISCALÍA PRESENTÓ:** a.- Informe de reconocimiento del lugar de los hechos. b.- Informe de ingresos de evidencias. c.- Parte de aprehensión. d.- Informe pericial balístico. e.- Informe de investigaciones **OBJECION DE LA DEFENSA DE LOS PROCESADOS:** NO Objeta prueba documental y pericial presentada por fiscalía. **4.2.- EL DEFENSOR DEL PROCESADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL EN LA FASE PROBATORIA A FAVOR DE SU DEFENDIDO, EN LO PRINCIPAL DIJO:** “Que se recepten como medio de prueba el testimonio de **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL (procesado)**, quien luego de recordarle sus derechos constitucionales establecidos en el Art. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador rindió su testimonio sin juramento de conformidad al Art. 507 del Código Orgánico Integral Penal el procesado, indico llamarse como lo tiene manifestado con C.C. No. C.I. 0954832515, quien dijo ser de nacionalidad Ecuatoriano, de 27 años de edad, de estado civil Unión Libre de instrucción secundaria; de profesión u ocupación comerciante, domiciliado en Pascuales Coop. Asad Bucaram Mz. 375 Solar 18 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, **QUIEN SE ACOGIO AL DERECHO AL SILENCIO y COMO PRUEBA DOCUMENTAL LA DEFENSA DEL PROCESADO:** No Presentó nada **QUINTO: ALEGATOS DE CLAUSURA O CIERRE DE LA FISCALÍA Y DEFENSA:** Concluida la fase probatoria, el presidente del Tribunal concedió la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, en el siguiente orden: **5.1.1.- EL REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA AL EXPONER SU ALEGATO DE CLAUSURA O CIERRE, DEL PROCESADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL, DIJO:** Fiscalía en sus alegatos iniciales indico que demostraría tanto la materialidad como la responsabilidad del señor Alberto Francisco Malavé Peñafiel del hecho ocurrido el 4 de Octubre del 2022 a las 18h00 aproximadamente. Aquí acudió a rendir testimonio el agente aprehensor Bryan Barzallo quien manifestó que a el se le dio a conocer que en la Ave. Francisco de Orellana dentro del bus de la línea 62 se estaba cometiendo un robo y al ver la presencia policial el bus paro la marcha para recibir ayuda y aquí salen 2 personas a precipitada carrera del bus siendo una de estas personas Alberto Francisco Malavé Peñafiel quien se bajó del vehículo y se subió de copiloto a una moto donde tuvieron una persecución ininterrumpida por unos 5 minutos y al ser interceptado y revisado se le encontró un arma de fuego tipo pistola traumática la cual está ingresada junto con las demás evidencias tales como tarjetas, celulares e identificaciones de las víctimas. Si bien es cierto el arma de fuego no era apta para emitir disparos tal como se detallan en el informe balístico esta si fue usada para amedrentar y amenazar a las víctimas. Esta arma es traumática. Consta el reconocimiento del lugar de los hechos donde se establece que el lugar existe y concuerda con lo que manifestó el agente aprehensor referente a que el hecho se dio en la Ave. Francisco de Orellana diagonal a almacenes el coral y este fue detenido en la Coop. Vilcabamba que es el lugar donde los procesados huyeron después del robo al bus de la línea 62. Se reviso y el señor Alberto Francisco Malavé Peñafiel tiene varias detenciones por robo. Se ha podido determinar tanto materialidad como responsabilidad Por lo que esta fiscalía lo acusa en calidad de autor directo por el delito sancionado y reprimido en el artículo 189 inc. 1 en concordancia con el Art. 42 numeral 1 literal a del código orgánico integral penal. por lo que solicita sea sentenciado a con la pena privativa de libertad establecida en este tipo penal y la multa establecida en el artículo 70 numeral 8 y reparación integral. Menciono y entrego la ficha donde se detalla que el ciudadano Ponce Posligua Jeykol Guillermo ha fallecido. **5.1.2.- LA DEFENSORA**

DEL PROCESADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL, AL EXPONER SU ALEGATO DE CLAUSURA O CIERRE EN LO PRINCIPAL DIJO: Hemos escuchado la prueba de fiscalía y esta defensa debe indicar que en ningún momento ni una sola persona en este juicio ha podido visualizar el supuesto robo del cual se acusa a mi defendido. La policía solo indica que acudió al llamado por un supuesto aviso de un robo, pero nada más ve a 2 personas que corriendo bajan de un bus y las persiguen asumiendo que eran los ladrones y les encuentran un arma que no es apta para producir disparos y por ende no sirve ni para alegar porte de armas. No existe ni una denuncia de este supuesto robo. Por ende, no se puede establecer que esta persona realizara lo que se le trata de acusar, una de las personas incluso ya falleció por ende no se puede ni determinar si son autores o coautores. Todo es circunstancial ya que solo responden a una alerta y asumen al ver a 2 personas corriendo. Por lo tanto, se solicita se ratifique el estado de inocencia de mi defendido Alberto Francisco Malavé Peñafiel. **SEXTO: LA PRUEBA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL:** El Art. 167 de la Constitución establece: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”; por su parte el Art. 168 Nos. 5 y 6 ibídem, determina que “La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. 6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”; al respecto, el Art. 169 de la Ley ut supra, consagra: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”. Derechos y principios, que se encuentran plasmados además en los Arts. 18 al 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Siendo que el juicio es la etapa principal del proceso y se sustancia sobre la base de la acusación fiscal, conforme lo determina el Art. 609 del Código Orgánico Integral Penal, así como en él se regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución, tal y como lo prescribe el Art. 610 ibídem; es importante indicar la importancia de la prueba en dicha etapa. LA PRUEBA TIENE POR FINALIDAD LLEVAR A LA O AL JUZGADOR AL CONVENCIMIENTO DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS MATERIA DE LA INFRACCIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA PROCESADA (Art. 453 del COIP); se desarrolla a base de los principios de oportunidad probatoria (es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y practicada únicamente en la Audiencia de juicio; excepcionalmente cuando no es anunciada se la puede receptar en Audiencia de juicio, siempre y cuando: 1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento; y, 2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso; así como podrá ser prueba el testimonio producido de forma anticipada, de conformidad con los Arts. 454 No. 1 y 617 del COIP), inmediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión; y, de igualdad de oportunidades para la prueba (Art. 454 del COIP). Los medios de prueba son: 1.- El documento; 2.- El testimonio; y, 3.- La pericia. Es así que los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la Audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio producido de forma anticipada. (Art. 454 No. 1 inciso segundo y tercero del COIP); teniendo en cuenta que los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán

admitidos como prueba (Art. 454 No. 6 parte final del COIP); pues se determina que “LA O EL JUZGADOR, PARA DICTAR SENTENCIA CONDENATORIA, DEBE TENER EL CONVENCIMIENTO DE LA CULPABILIDAD PENAL DE LA PERSONA PROCESADA, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE” (Art. 5 No. 3 del COIP). Efectivamente, la sentencia condenatoria debe edificarse sobre la valoración razonable de los medios de prueba debatidos en el juicio oral, que debe llevar al juzgador, más allá de toda duda, al convencimiento de la responsabilidad penal del acusado. (Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, Manual General para Operadores Jurídicos, Segunda Edición, Pág. 21). Se deriva, en consecuencia, de esta regla probatoria, lo siguiente (Fernández, 2005): a) la existencia de actividad probatoria suficiente –en contraposición a la simple sospecha– para la obtención del convencimiento judicial más allá de toda duda razonable; b) la existencia de prueba de cargo, que recaiga sobre la existencia del hecho y la participación en él del acusado –prueba directa e indirecta–, expresando en la sentencia las razones que llevan al juez a valorar que se trata de prueba incriminatoria; c) actividad probatoria suministrada por la acusación: se exige que la actividad probatoria de cargo sea aportada al proceso por la acusación, toda vez que la presunción de inocencia permite al acusado permanecer inactivo sin que la falta de pruebas de descargo pueda actuar en su contra –con perjuicio–; d) prueba practicada en juicio oral, para que pueda desvirtuar la presunción de inocencia y cumplir con el principio de contradicción –con las excepciones de la prueba anticipada–; e) pruebas practicadas con respeto de las garantías procesales y de los derechos fundamentales: por ello es coherente afirmar que las pruebas practicadas en el juicio oral permiten potenciar la inmediación, la publicidad, la concentración, la celeridad y la contradicción (Bustamante, 2009). Igualmente esta exigencia excluye que la prueba obtenida con desconocimiento de los derechos fundamentales pueda ser valorada en la sentencia. (Mónica María Bustamante Rúa. La relación del estándar de prueba de la duda razonable y la presunción de inocencia desde el garantismo procesal en el Proceso Penal Colombiano. Pág. 84). Lo dice bien Taruffo cuando afirma que “el significado central que se expresa a través de ese estándar es evidente: este requiere un grado particularmente alto de confirmación probatoria de la culpabilidad del imputado, que se aproxima a la certeza, dado que sólo admite la presencia de dudas “irrazonables”, con la evidente intención de reducir al mínimo el riesgo de condena de un inocente” (Taruffo, Michele, Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2010, Pág. 249). Es decir, las pruebas se practican con el fin de acreditar ante el Juez los presupuestos de una sentencia condenatoria y, por ello, el debate probatorio no es más que el medio a través del cual la Fiscalía da cumplimiento a la carga probatoria que le asiste. (Los Nuevos Fundamentos de las Pruebas Penales. Una Reflexión desde la Estructura Constitucional del Proceso Penal Colombiano. José Joaquín Urbano Martínez, Pág. 123).

SÉPTIMO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El Art. 28 tercer inciso del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “PRINCIPIO DE LA OBLIGATORIEDAD DE ADMINISTRAR JUSTICIA.- (...) Los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.”; en concordancia con el Art. 129 No. 2 que dice: “FACULTADES Y DEBERES GENERICOS DE LAS JUEZAS Y JUECES.- A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y Jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente.”; y con el Art. 130 No. 2 que consagra: “FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- Es facultad esencial de las juezas y Jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 2. Velar por una eficiente aplicación de los principios procesales.”; todos del referido Cuerpo Legal; es por ello, la relevancia de establecer el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinario para luego analizar el fondo; esto es, de la decisión tomada por este Tribunal, en la presente causa: **7.1.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE ROBO**, acusado por la Fiscalía y por el cual se sentenció, y así tenemos: El delito de robo, acusado por la Fiscalía y por el cual se sentenció, se encuentra tipificado en el Art. 189 primer inciso del Código Orgánico

Integral Penal, que dice: “Art. 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitararlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. El tipo penal referido se haya establecido en la Sección Novena “Delitos contra el derecho a la propiedad”, Capítulo Segundo “Delitos contra los derechos de libertad”, Título IV “Infracciones en particular”, Libro Primero “La Infracción Penal”. El objeto jurídico o bien jurídico protegido es la propiedad, tomada ésta en su sentido más amplio, lo que no significa desconocer que a través de los delitos contra la propiedad el legislador ha querido proteger también a veces otros bienes jurídicos diferentes, como la vida -robo con resultado muerte- y la integridad corporal o personal -robo con violencia en las personas que ocasiona lesiones-, la libertad -extorsión- (Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, Tomo Tercero, Parte Especial, Pág. 289), que es lo que impide la aplicación del procedimiento directo, cuando si bien puede ser el hecho calificado como flagrante, además la condición objetiva de punibilidad no excede de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general; sin embargo, supera el tiempo de pena privativa de libertad permitido de cinco años (que en el caso previsto en el Art. 189 primer inciso del COIP, va de cinco a siete años); así como cuando se afecta además de la propiedad otro bien jurídico tutelado como la integridad personal (lesiones), requisitos y excepciones previstas en el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal, tal y como ha ocurrido en el caso in examine, por ello su trámite a través del procedimiento ordinario. El objeto material de dicho delito está dado por la cosa en general, incidiendo en cosa mueble ajena; constituido por elementos de tipo: objetivos, subjetivo y normativo. Dentro de los elementos objetivos encontramos: 1.- “Violencia”, la misma que se ejecuta contra las personas y no contra las cosas, si bien el Código Orgánico Integral Penal, no la define en relación a los delitos contra la propiedad, sí lo hace respecto a los “Delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar”, considerando a la violencia como toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico... (Art. 155 del COIP); por lo que, para efectos del delito de robo, la doctrina considera que la violencia debe entenderse como el constreñimiento físico, material, que el agente ejerce sobre una persona para lograr la sustracción de la cosa, o apoderamiento de ésta, o para lograr la impunidad. De acuerdo con el Art. 189, in fine, la violencia que concurre a la tipificación del robo puede ejercerse en tres momentos distintos a saber: a) “antes del acto para facilitararlo”, esto es, la violencia que se ejerce sobre las personas antes del acto tendente a la sustracción de la cosa debe ir dirigida, como lo dice la ley, a facilitar dicha sustracción; esto es, que la violencia precedente es la de hacer factible la debilitación de la esfera de custodia de la cosa para sacarla de dicha esfera e incorporarla a la del sujeto activo del delito; b) “en el momento de cometerlo”, esto es, que la violencia se ejerce en el momento en que comienza el acto de la sustracción hasta que ésta se ha consumado; y, c) “después de cometido para procurar su impunidad”; esto es, la violencia que se ejecuta al momento inmediato posterior al acto de la sustracción de la cosa, que tiene por finalidad o impedir la recuperación de la cosa o procurar la impunidad. 2.- “amenazas”, que se dirige contra las personas, si bien el Código Orgánico Integral Penal, no la define, la doctrina la concibe como los medios de apremio moral que infundan el temor de un mal inminente; esto es, para que la amenaza constituya un elemento específico del robo es necesario que sea de tal naturaleza que infunda en el ánimo de la víctima el temor de que el sujeto activo del delito lo haga objeto de un mal personal, por lo que representa un mal inminente. 3.- “sustraiga”, que equivale a retirar, apartar, separar; esto es, el desplazamiento de la cosa mueble ajena de la esfera de custodia y de poder de la víctima hacia la esfera de custodia y de poder del justiciable. 4.- “apodere”; esto es, un comportamiento propio y activo de desplazamiento físico de la cosa mueble desde la esfera del patrimonio del sujeto pasivo hasta la del sujeto activo (Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II-B, Pág. 30). En el mismo sentido, Fontán Balestra define “apoderarse” como tomar una cosa para someterla al propio poder, con el fin de llegar a disponer de ella, y en base a ello concluye que el autor consuma este delito cuando pone la cosa bajo su poder, al par que la quita del poder de quien la tenía, toda vez que no es dable pensar en un poder compartido. En el delito de robo, el acto de apoderamiento se estructura con el acto material de obtención de la cosa, y con el propósito de someterla al

propio poder, es decir, el de disponer de ella, propósito que comprende cualquier finalidad de uso, goce, afectación o destino que una persona puede obtener de una cosa o le pueda dar a ella. (CNCCorr., sala IV, 13-6-96, "Duhour, Antonio y otro", J. A); se conoce este verbo rector, como *animus rem sibi habendi*, que se presenta como afirma Beling, bajo dos aspectos objetivos: uno, la cosa sale de la esfera de custodia y, por ende, del patrimonio del sujeto pasivo del delito; otro, la cosa ingresa en la esfera de custodia del sujeto activo del delito, existiendo entre ambos un nexo psicológico, la salida de la cosa de la esfera de custodia del dueño es con el ánimo de que ingrese en el patrimonio del agente (sujeto activo del delito) o de quien ha impulsado al agente con el propósito de señor y dueño. 4.- "Cosa", es un fenómeno que existe en el mundo exterior que siendo objetivamente corporal es, además, tangible y susceptible de apropiación; en este sentido se exige que la cosa sea "mueble", entendido como todo aquello que pueda movilizarse. Dentro del elemento normativo encontramos la "ajenidad".- 1.- La cosa mueble que es objeto de la sustracción, para que llegue a constituir el delito en análisis, es necesario que sea "ajena", es decir que no pertenezca al sujeto activo del delito, ni haya sido sustraída con consentimiento del dueño, es decir que el agente no tenga ni una parte, ni todo el derecho de propiedad. Dentro del elemento subjetivo, encontramos: 1.- "el dolo", actúa con dolo el que sabe que la cosa que se sustrae es ajena y que esa actividad es contraria a la norma jurídica, pues tiene conocimiento del injusto y pese a ello, voluntariamente, ejecuta el acto; dicho en otras palabras, es la voluntad intencional dirigida a la sustracción de una cosa que se sabe que no es propia; y no sólo se sabe que no es propia, sino que se sabe ajena. Al referirnos al dolo tenemos, en este sentido el Art. 26 del Código Orgánico Integral Penal, señala: "Dolo.- Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño". El dolo según Luis Jiménez de Azúa, en su obra Principios de Derecho Penal La Ley y El Delito, Editorial Sudamericana Buenos Aires, en la pág. 365, señala: Existe cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con consciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere o ratifica. Gustavo Labatud Glenda, en su obra Derecho Penal, Tomo I, Séptima Edición, pág. 115 lo define como: "la voluntad de realizar una acción cuyo resultado ilícito, previsto como seguro, probable o posible, es querido o al menos asentido por el sujeto." El Dr. Efraín Torres Chaves, en su obra Breves Comentarios al Código Penal, Tomo I, en la pág. 34, señala: "La gran diferencia entre dolo y culpa, está dada, por la ausencia de voluntad en la segunda, para causar daño, lo que caracteriza a la infracción dolosa. Radica, pues, en el elemento intencional del hombre que se traduce en un acto cuyas circunstancias pueden decir, claramente, del proceso interno de la voluntad. Lo doloso, tiene un subgrupo, en que hay un resultado dañoso o peligroso, Mayor, del que previó y quiso el autor: el delito preterintencional". Sebastián Soler en su obra "Derecho Penal Argentino" Tomo II, dice: "que existe dolo no solamente cuando se ha querido un resultado, sino también cuando se ha tenido conciencia de la criminalidad de la propia acción y a pesar de ello se ha obrado". Según Hernando Grisanti, el dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito. Por su parte Francisco Carrara el dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe contrario a la ley. Vincenzo Manzini, define al dolo como la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley. Para Fernando Castellanos Tena, el dolo consiste en el actuar, consciente y voluntario, dirigido a la producción de un resultado típico y antijurídico. Para Zaffaroni, dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, necesarios para su configuración. (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Derecho Penal – Parte General, Editorial Ediar, Buenos Aires 2000, págs. 500 y 501). Para Bacigalupo, "el dolo se caracteriza básicamente por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, es decir, de los elementos que caracterizan la acción como generadora de un peligro jurídicamente desaprobado que afecta de manera concreta un determinado objeto protegido". (BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal – Parte General, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 317.). Para Jakobs, "dolo es el conocimiento de la acción junto con sus consecuencias" y aclara que el

determinar si existe o no aquél “atiende al conocimiento del autor como hecho psíquico, presupuesto mínimo es que el autor tenga una imagen de con qué consecuencias actúa. Si falta ésta, decae de lege lata, el dolo”. (JAKOBS, Günther, Derecho Penal – Parte General – Fundamentos y Teoría de la Imputación, Editorial Marcial Pons, 2ª edición corregida, págs. 316 y 319). Existe una clasificación tripartida del dolo, de suerte que para nosotros el dolo es directo, de consecuencias necesarias y eventual. El Dolo Directo es aquel en el que hay un total y plena identificación entre el resultado previsto y querido por el autor y el que obtiene realmente. El Dolo de Consecuencias necesarias es aquel en que el resultado se le representa al autor como un efecto o consecuencia inevitable de su actuar voluntario. Y el dolo eventual, es el conocer los elementos objetivos del tipo y aceptar –como forma de querer- la realización del tipo que se le presenta al autor como probable o como posible. (Dr. Alfonso Zambrano Pasquel P. Manual de Derecho Penal, Parte General, pág. 81). El sujeto activo y pasivo de este delito puede ser cualquier persona que efectúa la conducta típica, y éste último puede ser cualquiera que tenga la custodia de la cosa, sea como dueño, poseedor, mero tenedor, o portador. El momento consumativo requiere la disponibilidad de la cosa sustraída por el sujeto activo del delito, más que real y efectiva debe ser potencial, esto es entendida como posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída, pues se necesita: a) El desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del sujeto pasivo del delito –desde su esfera de custodia- a la del sujeto activo; y, b) La realización de actos posesorios, de disposición sobre la misma; siendo en tal sentido que el momento en que el dueño, poseedor, mero tenedor, o portador de la cosa ajena, deja de tener a ésta en el ámbito de protección dominical y, por consiguiente, cuando el sujeto activo del delito pone bajo su poder de hecho; siendo este poder de hecho –resultado típico- el que permite la posibilidad de realizar actos de disposición, aun cuando sólo sea por un breve tiempo, es decir, cuando tiene el potencial ejercicio de facultades dominicales, siendo ese el momento en que es posible sostener que el autor consumó el delito. (En este sentido, el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, opina en su obra Delitos contra la Propiedad, Tomo I, Hurto- Robo- Abigeato). Este delito se encuentra reprimido con pena privativa de libertad de “cinco a siete años”; con pena restrictiva de los derechos de propiedad, con multa de “doce a veinte salarios básicos unificados del trabajador en general” (Art. 70 No. 8 del COIP), y con pena no privativa de libertad, contempladas en el Art. 60 ibídem. **OCTAVO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: 8.1.- EXISTENCIA O MATERIALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA INFRACCIÓN (JUICIO DE DISVALOR SOBRE EL ACTO).**- Por tales antecedentes este Tribunal tiene el CONVENCIMIENTO DE LOS HECHOS , EL NEXO CAUSAL DE LA INFRACCIÓN, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE; sin que exista alguna causa de exclusión de la conducta o de exclusión de la antijuridicidad; habiéndose PROBADO LA MATERIALIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA INFRACCIÓN, por lo siguiente: **8.1.1.-** Por los testimonios de terceros, rendidos bajo juramento de los señores: **8.1.1.1.- TESTIMONIO DEL SGTO.S DE POLICIA VÍCTOR MANUEL ZAMORA PINCAY, QUIEN REALIZÓ EL INFORME PERICIAL DE RECONOCIMIENTO DE EVIDENCIAS, QUIEN DIJO:**La pericia tenía como objeto reconocimiento y avalúo de las evidencias y como conclusión se determinó que las evidencias descritas en el presente informe existen y se encuentran en la bodega de la policial judicial de la zona 8 en regular estado de conservación. El arma traumática se encuentra en la sección de balística retirada mediante cadena de custodia por el sargento Jimmy Rodríguez. El avalúo de evidencias se encuentra detallado en el acápite 4.2. dando cumplimiento a los oficios de 7 de Octubre del 2022 por el presunto delito de robo las evidencias quedan plasmadas en fotografías, en la numero 1 se detalla un teléfono celular. Fotografía 2 es la parte posterior del dispositivo de la fotografía 1. Foto 3 teléfono celular marca Hyundai color azul sin tarjeta de memoria y sin chip. En la fotografía 3 a 5 se detalla este mismo equipo y sus partes. En la fotografía 6 se detalla un celular blanco marca Samsung sin tarjeta de memoria ni chip. Las fotografías 7 y 8 detallan este dispositivo. En la fotografía 9 teléfono celular color celeste marca tekno sin memoria y sin chip. La fotografía 12 es de un bolso color morado. La 13 es una cartera color negro de material textil y que en su tercio medio tiene una placa rosada con una leyenda que se lee Rampae. Fotografía 15 bolso negro con rojo. Fotografía 17 se ven 3 tarjetas plásticas 2 del Banco

Pichincha y una de Pycca a nombre de Rosa Arias. Fotografía 18 2 tarjetas de Banco Pichincha a nombre de Norma Morales. Fotografía 19 un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Herrera García Carlos Eduardo. Fotografía 21 un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Peñafiel Esther. Fotografía 22 se ven soportes de papel moneda de \$20. Fotografía 24 4 soportes de papel moneda de denominación \$5. A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: El arma no estaba al momento de mi pericia pues había sido retirada por cadena de custodia para pericia balística, pero si existe el arma. En total se encontraron 4 celulares. **8.1.1.2.- TESTIMONIO DEL SGTO.S DE POLICIA DANIEL VICENTE VERA MORALES, QUIEN REALIZÓ EL INFORME DE INVESTIGACIONES, QUIEN DIJO:** Dando cumplimiento al oficio emitido por la fiscalía con fecha 7 de Octubre del 2022 en relación con el parte policial de fecha 4 de Octubre del 2022 mismo que están procesados los ciudadanos Malavé Peñafiel Alberto Francisco y Ponce Posligua Jeykol Guillermo por un presunto delito de robo. Cumpliendo con las diligencias solicitadas por fiscalía y cumpliendo el artículo 44 numerales 2 4 y 6 del código orgánico integral penal procedí a realizar las diligencias de ley esto es la ubicación y descripción del lugar de los hechos, es así que el día martes 18 de Octubre del 202 a las 11h30 me traslade a la Ave. Francisco de Orellana diagonal al Almacén El Coral sitio en el cual según el parte policial vieron a 2 sujetos que se bajaban a precipitada carrera de un bus y se subían a una motocicleta tipo pantanera para darse a la fuga. Inmediatamente la policía bajó las referencias de las personas que estaban en el bus inicio la persecución. El cabo segundo Barzallo Bryan y otro compañero del grupo motorizado los persiguieron por varias calles e intercepciones y es así que al llegar a la calle Vilcabamba pudieron observar que se bajan de la moto e ingresan a una vivienda por lo cual la policía ingresa a esta vivienda y los neutraliza y al momento de identificarlos uno de ellos responde a nombres Alberto Francisco Malave Peñafiel de 24 años de edad y el otro Guillermo Ponce Posligua de 19 años de edad el mismo que tenía en su poder un bolso naranja y varios objetos que fueron ingresados bajo cadena de custodia a las bodegas de la policía nacional. En mi informe se detalla la primera escena que es el lugar donde se robó al bus y existe la toma fotográfica de donde se procedió a la neutralización de los procesados los cuales tenían en su poder un arma de fuego, tarjetas, celulares, dinero en efectivo y otros documentos. Realice la verificación en el sistema de la policía nacional y se pudo constatar que el ciudadano Ponce Posligua Jeykol Guillermo de 20 años de edad con cedula 0944318238 registra la detención actual y no tiene orden de captura. El ciudadano Malave Peñafiel Alberto Francisco de 25 años de edad en ese entonces el cual registra 3 detenciones contando la actual. Me entrevisté con los compañeros del grupo motorizado con los cuales realicé la diligencia de donde se dio la persecución y la aprehensión de los hoy procesados. El robo ocurrió en la Ave. Francisco de Orellana diagonal al Almacén El Coral en la línea 62 que estaba en circulación y la aprehensión fue en la Coop. Vilcabamba es el mismo sector de la Ave. Francisco de Orellana, pero los separan varias intercepciones. **AL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROECSADO, EÑ TETIGO DIJO:** Yo no me entreviste con ninguna víctima dentro de este proceso. **8.1.1.3.- TESTIMONIO DEL CBO.S DE POLICIA BRYAN GEOVANNY BARZALLO CONDO, QUIEN REALIZÓ EL PARTE DE APREHENSIÓN, QUIEN DIJO:** Nosotros diariamente contamos con una orden de servicio y yo me encontraba de conductor en la motocicleta Delta 539 como JP el cabo segundo Intriago Erick en coordinación con personal de inteligencia nos encontramos avanzando por la Ave. Francisco de Orellana, logramos visualizar un robo en proceso a una línea de bus a la altura del Coral y el señor conductor del bus al notar la presencia policial para la marcha y los presuntos ladrones bajan y se van en una motocicleta tipo pantanera negra sin placas. Se dan a la fuga en diferentes direcciones irrespetando los semáforos y poniendo en riesgo la vida de los servidores policiales, en la Coop. Vilcabamba se bajan de la motocicleta e intentan ingresar a un domicilio cuando son neutralizados por personal de inteligencia y nosotros. El señor Alberto Francisco Malavé Peñafiel que vestía una bvd color plomo y pantalón azul se le realiza un registro corporal y se le encuentra a la altura de la cintura un arma de fuego tipo traumática. La línea de bus que estaba siendo víctima de robo era la línea 62 y yo logre ver a quienes iban robando y el hoy procesado es quien iba de copiloto en la motocicleta. El cabo segundo Intriago es quien encontró el arma al señor Alberto

Francisco Malavé Peñafiel ya que yo revise a Ponce Posligua que tenía un bolso morado, uno negro y uno marca nike, un teléfono Samsung, un tecno, un Huawei, redmi y varios billetes de diferente denominación. Esto fue a las 18h30 aproximadamente en la calle Francisco de Orellana. A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: El procedimiento fue 4 de Octubre del 2022 a las 18h00 la hora de la aprehensión. La persecución que fue con sirenas encendidas y las balizas duro unos 5 minutos aproximadamente. Lo que se le encontró al señor Ponce Posligua era parte de las evidencias. **8.1.1.4.- TESTIMONIO DEL POLICIA SERVICIO PASIVO JIMMY DUVAL RODRÍGUEZ VILLAFUERTE QUE REALIZÓ EL INFORME TÉCNICO PERICIAL BALÍSTICO, QUIEN DIJO:** El 20 de Octubre del 2022 elabore un informe técnico pericial balístico DSG12203012 dentro de las referencias la fiscalía a través de oficio 0628-2022-005809-0 de fecha 7 de Octubre del 2022 dentro de la instrucción fiscal 09010182210017 por el presunto delito de robo. Se observa el objeto de la pericia el cual es practicar la pericia balística en el parte policial número 2022092800450737602 de fecha 4 de Octubre del 2022 en contra de Ponce Posligua Yeikol y Alberto Francisco Malavé Peñafiel. Una vez conocida la orden se procede a recabar el elemento que se encontraba bajo cadena de custodia de fecha 4 de Octubre del 2022 tratándose de un arma de fuego de marca ISSC de Austria calibre 9mm con serie 24203671 sin almacén cargador con empuñadura de polímetro color negro. Se deja en el informe imágenes del arma de anverso y reverso. Al arma se le realiza análisis químicos para verificar si existen elementos químicos que se crean al accionar el arma, se determina que esta arma si fue disparada luego de su última limpieza. El segundo análisis es el óptico donde se puede visualizar que el arma no tiene almacén cargador y la corredera de la parte posterior presenta sobre la superficie metálica una línea de desfragmentación de derecha a izquierda con espacios continuos y en el armazón de la parte superior tiene un desprendimiento por lo cual se determina que se encuentra en regulares condiciones. Se reviso estado de funcionamiento y actitud de disparo, se revisa la suficiencia de disparo del arma de fuego y las condiciones de las piezas las cuales no presentan impedibilidad ni ajustes en la parte posterior, el mecanismo de disparo está en mal estado de conservación y mal estado de funcionamiento por lo cual no es apta para producir disparos. A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: El arma de fuego era tipo pistola traumática de fabricación industrial y esta se encontraba con cadena de custodia. **8.1.1.5.- TESTIMONIO DEL CBO.P DE POLICIA JORGE ANTONIO GUERRERO SERNA, QUIEN REALIZÓ EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, QUIEN DIJO:** El 19 de Octubre del 2022 mediante diligencia fiscal se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos. Me dirigí a la Ave. Francisco de Orellana frente a los supermercados coral y tomé contacto con el cabo de policía Barsallo Bryan. El lugar es una vía de primer orden la Ave. Francisco de Orellana con numeración y nomenclatura, sentido de circulación oriente occidente. Al costado izquierdo del sentido del observador se ve el mall del rio y supermercados El Coral que es una construcción moderna de color beige y gris. Aquí seria el lugar de los hechos. Como conclusión el lugar existe y es una escena abierta está ubicada en la Ave. Francisco de Orellana. **Y COMO MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES, LA FISCALÍA PRESENTÓ:** **a.-** Informe de reconocimiento del lugar de los hechos. **b.-** Informe de ingresos de evidencias. **c.-** Parte de aprehensión. **d.-** Informe pericial balístico. **e.-** Informe de investigaciones **8.2- ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE CARGO QUE SIRVIERON DE BASE PARA DECLARAR LA EXISTENCIA O MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN Y LA CULPABILIDAD Y POR ENDE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL , ASÍ COMO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE DESCARGO O DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:** Los referidos medios probatorios testimoniales han sido valorados al tenor de lo dispuesto en el Art. 502 No. 1, que dice: “El testimonio se valorará en el contexto de toda la declaración rendida y en relación con las otras pruebas que sean presentadas”; estableciendo el “nexo causal entre la infracción y la persona procesada”, fundamentándose en hechos reales introducidos a través de dichos medios de prueba, tal y como lo exige el Art. 455, teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia, grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que

se fundamentan los informes periciales, al tenor de lo dispuesto en el Art. 457; cumpliendo su finalidad contemplada en el Art. 453, que reza: “llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada”; obteniendo el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable, presupuesto para dictar sentencia condenatoria, al amparo de lo previsto en el Art. 5 No. 3, todos del Código Orgánico Integral Penal; teniendo en cuenta los principios de oportunidad probatoria (es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y practicada únicamente en la Audiencia de juicio; excepcionalmente cuando no es anunciada se la puede receptor en Audiencia de juicio, siempre y cuando: 1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento; y, 2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso; así como podrá ser prueba el testimonio producido de forma anticipada, de conformidad con los Arts. 454 No. 1 y 617 del COIP), intermediación, contradicción, libertad probatoria, pertinencia, exclusión; y, de igualdad de oportunidades para la prueba (Art. 454 del COIP); que en el caso sub examine, por cuanto se llegó al CONVENCIMIENTO DE LA CULPABILIDAD PENAL DE LA PERSONA PROCESADA, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, ya que existen recaudos probatorios testimoniales rendidos bajo juramento, que fueron presentados como medios de prueba de cargo por parte de la acusación fiscal, siendo concordantes todos los agentes aprehensores que participaron en la detención de los ciudadanos hoy sentenciado **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, así mismo con el Reconocimiento del Lugar de los Hechos y evidencias; esto es con el testimonio: **8.2.1.- TESTIMONIO DEL SGTO.S DE POLICIA VÍCTOR MANUEL ZAMORA PINCAY, QUIEN REALIZÓ EL INFORME PERICIAL DE RECONOCIMIENTO DE EVIDENCIAS, QUIEN DIJO: La pericia tenía como objeto reconocimiento y avalúo de las evidencias y como conclusión se determinó que las evidencias descritas en el presente informe existen y se encuentran en la bodega de la policial judicial de la zona 8 en regular estado de conservación. El arma traumática se encuentra en la sección de balística retirada mediante cadena de custodia por el sargento Jimmy Rodríguez.** El avalúo de evidencias se encuentra detallado en el acápite 4.2. dando cumplimiento a los oficios de 7 de Octubre del 2022 por el presunto delito de robo las evidencias quedan plasmadas en fotografías, en la numero 1 se detalla un teléfono celular. Fotografía 2 es la parte posterior del dispositivo de la fotografía 1. Foto 3 teléfono celular marca Hyundai color azul sin tarjeta de memoria y sin chip. En la fotografía 3 a 5 se detalla este mismo equipo y sus partes. En la fotografía 6 se detalla un celular blanco marca Samsung sin tarjeta de memoria ni chip. Las fotografías 7 y 8 detallan este dispositivo. En la fotografía 9 teléfono celular color celeste marca tekno sin memoria y sin chip. La fotografía 12 es de un bolso color morado. La 13 es una cartera color negro de material textil y que en su tercio medio tiene una placa rosada con una leyenda que se lee Rampae. Fotografía 15 bolso negro con rojo. Fotografía 17 se ven 3 tarjetas plásticas 2 del Banco Pichincha y una de Pycca a nombre de Rosa Arias. Fotografía 18 2 tarjetas de Banco Pichincha a nombre de Norma Morales. Fotografía 19 un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Herrera García Carlos Eduardo. Fotografía 21 un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Peñafiel Esther. Fotografía 22 se ven soportes de papel moneda de \$20. Fotografía 24 4 soportes de papel moneda de denominación \$5. A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: El arma no estaba al momento de mi pericia pues había sido retirada por cadena de custodia para pericia balística, pero si existe el arma. En total se encontraron 4 celulares. **8.2.2.- TESTIMONIO DEL SGTO.S DE POLICIA DANIEL VICENTE VERA MORALES, QUIEN REALIZÓ EL INFORME DE INVESTIGACIONES, QUIEN DIJO:** Dando cumplimiento al oficio emitido por la fiscalía con fecha 7 de Octubre del 2022 en relación con el parte policial de fecha 4 de Octubre del 2022 mismo que están procesados los ciudadanos Malavé Peñafiel Alberto Francisco y Ponce Posligua Jeykol Guillermo por un presunto delito de robo. Cumpliendo con las diligencias solicitadas por fiscalía y cumpliendo el artículo 44 numerales 2 4 y 6 del código orgánico integral penal **procedí a realizar las diligencias de ley esto es la ubicación y descripción del lugar de los hechos**, es así que el día martes 18 de Octubre del 202 a las 11h30 me traslade a la Ave. Francisco de

Orellana diagonal al Almacén El Coral sitio en el cual según el parte policial vieron a 2 sujetos que se bajaban a precipitada carrera de un bus y se subían a una motocicleta tipo pantanera para darse a la fuga. Inmediatamente la policía bajó las referencias de las personas que estaban en el bus inicio la persecución. El cabo segundo Barzallo Bryan y otro compañero del grupo motorizado los persiguieron por varias calles e intercepciones y es así que al llegar a la calle Vilcabamba pudieron observar que se bajan de la moto e ingresan a una vivienda por lo cual la policía ingresa a esta vivienda y los neutraliza y al momento de identificarlos uno de ellos responde a nombres Alberto Francisco Malave Peñafiel de 24 años de edad y el otro Guillermo Ponce Posligua de 19 años de edad el mismo que tenía en su poder un bolso naranja y varios objetos que fueron ingresados bajo cadena de custodia a las bodegas de la policía nacional. En mi informe se detalla la primera escena que es el lugar donde se robó al bus y existe la toma fotográfica de donde se procedió a la neutralización de los procesados los cuales tenían en su poder un arma de fuego, tarjetas, celulares, dinero en efectivo y otros documentos. Realice la verificación en el sistema de la policía nacional y se pudo constatar que el ciudadano Ponce Posligua Jeykol Guillermo de 20 años de edad con cedula 0944318238 registra la detención actual y no tiene orden de captura. El ciudadano Malave Peñafiel Alberto Francisco de 25 años de edad en ese entonces el cual registra 3 detenciones contando la actual. Me entrevisté con los compañeros del grupo motorizado con los cuales realicé la diligencia de donde se dio la persecución y la aprehensión de los hoy procesados. El robo ocurrió en la Ave. Francisco de Orellana diagonal al Almacén El Coral en la línea 62 que estaba en circulación y la aprehensión fue en la Coop. Vilcabamba es el mismo sector de la Ave. Francisco de Orellana, pero los separan varias intercepciones. AL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROECSADO, EÑ TETIGO DIJO: Yo no me entreviste con ninguna víctima dentro de este proceso. **8.2.3.- TESTIMONIO DEL CBO.S DE POLICIA BRYAN GEOVANNY BARZALLO CONDO, QUIEN REALIZÓ EL PARTE DE APREHENSIÓN, QUIEN DIJO:** Nosotros diariamente contamos con una orden de servicio y yo me encontraba de conductor en la motocicleta Delta 539 como JP el cabo segundo Intriago Erick en coordinación con personal de inteligencia nos encontramos avanzando por la Ave. Francisco de Orellana, logramos visualizar un robo en proceso a una línea de bus a la altura del Coral y el señor conductor del bus al notar la presencia policial para la marcha y los presuntos ladrones bajan y se van en una motocicleta tipo pantanera negra sin placas. Se dan a la fuga en diferentes direcciones irrespetando los semáforos y poniendo en riesgo la vida de los servidores policiales, en la Coop. Vilcabamba se bajan de la motocicleta e intentan ingresar a un domicilio cuando son neutralizados por personal de inteligencia y nosotros. EL SEÑOR ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL QUE VESTÍA UNA BVD COLOR PLOMO Y PANTALÓN AZUL SE LE REALIZA UN REGISTRO CORPORAL Y SE LE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LA CINTURA UN ARMA DE FUEGO TIPO TRAUMÁTICA. LA LÍNEA DE BUS QUE ESTABA SIENDO VÍCTIMA DE ROBO ERA LA LÍNEA 62 Y YO LOGRE VER A QUIENES IBAN ROBANDO Y EL HOY PROCESADO ES QUIEN IBA DE COPILOTO EN LA MOTOCICLETA. El cabo segundo Intriago es quien encontró el arma al señor Alberto Francisco Malavé Peñafiel ya que yo revise a Ponce Posligua que tenía un bolso morado, uno negro y uno marca nike, un teléfono Samsung, un tecno, un Huawei, redmi y varios billetes de diferente denominación. Esto fue a las 18h30 aproximadamente en la calle Francisco de Orellana. A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: El procedimiento fue 4 de Octubre del 2022 a las 18h00 la hora de la aprehensión. La persecución que fue con sirenas encendidas y las balizas duro unos 5 minutos aproximadamente. LO QUE SE LE ENCONTRÓ AL SEÑOR PONCE POSLIGUA ERA PARTE DE LAS EVIDENCIAS. **8.2.4.- TESTIMONIO DEL POLICIA SERVICIO PASIVO JIMMY DUVAL RODRÍGUEZ VILLAFUERTE QUE REALIZÓ EL INFORME TÉCNICO PERICIAL BALÍSTICO, QUIEN DIJO:** El 20 de Octubre del 2022 elabore un informe técnico pericial balístico DSG12203012 dentro de las referencias la fiscalía a través de oficio 0628-2022-005809-0 de fecha 7 de Octubre del 2022 dentro de la instrucción fiscal 09010182210017 por el presunto delito de robo. Se observa el objeto de la pericia el cual es practicar la pericia balística en el parte policial número

2022092800450737602 de fecha 4 de Octubre del 2022 en contra de Ponce Posligua Yeikol y Alberto Francisco Malavé Peñafiel. Una vez conocida la orden **SE PROCEDE A RECABAR EL ELEMENTO QUE SE ENCONTRABA BAJO CADENA DE CUSTODIA DE FECHA 4 DE OCTUBRE DEL 2022 TRATÁNDOSE DE UN ARMA DE FUEGO DE MARCA ISSC DE AUSTRIA CALIBRE 9MM CON SERIE 24203671 SIN ALMACÉN CARGADOR CON EMPUÑADURA DE POLÍMETRO COLOR NEGRO.** Se deja en el informe imágenes del arma de anverso y reverso. Al arma se le realiza análisis químicos para verificar si existen elementos químicos que se crean al accionar el arma, se determina que esta arma si fue disparada luego de su última limpieza. El segundo análisis es el óptico donde se puede visualizar que el arma no tiene almacén cargador y la corredera de la parte posterior presenta sobre la superficie metálica una línea de desfragmentación de derecha a izquierda con espacios continuos y en el armazón de la parte superior tiene un desprendimiento por lo cual se determina que se encuentra en regulares condiciones. Se reviso estado de funcionamiento y actitud de disparo, se revisa la suficiencia de disparo del arma de fuego y las condiciones de las piezas las cuales no presentan impedibilidad ni ajustes en la parte posterior, *el mecanismo de disparo está en mal estado de conservación y mal estado de funcionamiento por lo cual no es apta para producir disparos.* A LAS ACLARACIONES DEL TRIBUNAL, EL TESTIGO DIJO: *El arma de fuego era tipo pistola traumática de fabricación industrial y esta se encontraba con cadena de custodia.* **8.2.5.- TESTIMONIO DEL CBO.P DE POLICIA JORGE ANTONIO GUERRERO SERNA, QUIEN REALIZÓ EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, QUIEN DIJO:** El 19 de Octubre del 2022 mediante diligencia fiscal se realizó el reconocimiento del lugar de los hechos. Me dirigí a la Ave. Francisco de Orellana frente a los supermercados coral y tomé contacto con el cabo de policía Barsallo Bryan. *El lugar es una vía de primer orden la Ave. Francisco de Orellana con numeración y nomenclatura, sentido de circulación oriente occidente. Al costado izquierdo del sentido del observador se ve el mall del rio y supermercados El Coral que es una construcción moderna de color beige y gris. Aquí seria el lugar de los hechos. Como conclusión el lugar existe y es una escena abierta está ubicada en la Ave. Francisco de Orellana.* **Y COMO MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES, LA FISCALÍA PRESENTÓ:** a.- Informe de reconocimiento del lugar de los hechos. b.- Informe de ingresos de evidencias. c.- Parte de aprehensión. d.- Informe pericial balístico. e.- Informe de investigaciones. **CON LO QUE SE INFIERE LO SIGUIENTE:** a) Que los procesados *ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL*, tenían bajo la esfera de su dominio y con arma de fuego la misma que era utilizada con otros participantes quien bajo violencia despojaron de sus pertenencias a los pasajeros de la línea 62 delos cuales consta como parte de las evidencia un teléfono celular marca Hyundai color azul sin tarjeta de memoria y sin chip, un celular blanco marca Samsung sin tarjeta de memoria ni chip, un celular color celeste marca tekno sin memoria y sin chip, un bolso color morado, una cartera color negro de material textil y que en su tercio medio tiene una placa rosada con una leyenda que se lee Rampae, un bolso negro con rojo,. 3 tarjetas plásticas 2 del Banco Pichincha y una de Pica a nombre de Rosa Arias, 2 tarjetas de Banco Pichincha a nombre de Norma Morales, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Herrera García Carlos Eduardo, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Peñafiel Esther, soportes de papel moneda de \$20 y 4 soportes de papel moneda de denominación \$5 **b.-** Los agentes aprehensores en coordinación con personal de inteligencia se encontraban por la Ave. Francisco de Orellana, logrando visualizar un robo en proceso a una línea de bus 62 a la altura del Coral y el conductor del bus al notar la presencia policial para la marcha y los presuntos ladrones bajan y se van en una motocicleta tipo pantanera negra sin placas los mismos que se dan a la fuga en diferentes direcciones irrespetando los semáforos y poniendo en riesgo la vida de los servidores policiales y en la Coop. Vilcabamba se bajan de la motocicleta e intentan ingresar a un domicilio cuando son neutralizados por personal de inteligencia y nosotros. Al hoy procesado Alberto Francisco Malavé Peñafiel que vestía una bvd color plomo y pantalón azul al realizarle el registro corporal se le encontró a la altura de la cintura un arma de fuego tipo traumática, siendo que los agentes aprehensores vieron que iban robando. Al procesado Ponce Posligua se le encontró las evidencias esto es

un teléfono celular marca Hyundai color azul sin tarjeta de memoria y sin chip, un celular blanco marca Samsung sin tarjeta de memoria ni chip, un celular color celeste marca tekno sin memoria y sin chip, un bolso color morado, una cartera color negro de material textil y que en su tercio medio tiene una placa rosada con una leyenda que se lee Rampae, un bolso negro con rojo,. 3 tarjetas plásticas 2 del Banco Pichincha y una de Pica a nombre de Rosa Arias, 2 tarjetas de Banco Pichincha a nombre de Norma Morales, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Herrera García Carlos Eduardo, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Peñafiel Esther, soportes de papel moneda de \$20 y 4 soportes de papel moneda de denominación \$5. El procedimiento fue 4 de Octubre del 2022 a las 18h00 la hora de la aprehensión. La persecución que fue con sirenas encendidas y las balizas duro unos 5 minutos aproximadamente. Lo que se le encontró al señor Ponce Posligua era parte de las evidencias. **c.- La Aprehensión de ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL y JEYCOL GUILLERMO PONCE POSLIGUA**, se realizó dentro de la flagrancia pues los agentes aprehensores una vez que se percataron que se estaba realizando un robo en proceso de la línea 62 mientras circulaban por la Ave. Francisco de Orellana en coordinación con personal de inteligencia anotar la presencia policial el chofer detuvo su marcha y proceden a huir siendo perseguido y neutralizados siendo que en el presente caso los reconoció plenamente como los participantes del delito denunciado, por lo que la persecución fue ininterrumpida conforme consta en el literal que antecede siendo siendo plenamente identificado los hoy procesados en procedimiento de flagrancia por las víctimas y los agentes aprehensores tratándose de un robo en proceso. **d.- Por lo que dicha prueba es univoca, concordante y relacionada entre si pues los agentes aprehensores una vez que tuvieron conocimiento del ilícito junto a las víctimas y siendo que también los agentes policiales se percataron de un robo en proceso actuaron de manera inmediata siendo aprehendidos el** hoy procesado Alberto Francisco Malavé Peñafiel que vestía una bvd color plomo y pantalón azul al realizarle el registro corporal se le encontró a la altura de la cintura un arma de fuego tipo traumática, siendo que los agentes aprehensores vieron que iban robando. Al procesado Ponce Posligua se le encontró las evidencias esto es un teléfono celular marca Hyundai color azul sin tarjeta de memoria y sin chip, un celular blanco marca Samsung sin tarjeta de memoria ni chip, un celular color celeste marca tekno sin memoria y sin chip, un bolso color morado, una cartera color negro de material textil y que en su tercio medio tiene una placa rosada con una leyenda que se lee Rampae, un bolso negro con rojo,. 3 tarjetas plásticas 2 del Banco Pichincha y una de Pica a nombre de Rosa Arias, 2 tarjetas de Banco Pichincha a nombre de Norma Morales, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Herrera García Carlos Eduardo, un soporte de papel plástico (cedula de identidad) a nombre de Peñafiel Esther, soportes de papel moneda de \$20 y 4 soportes de papel moneda de denominación \$5. El procedimiento fue 4 de Octubre del 2022 a las 18h00 la hora de la aprehensión. La persecución que fue con sirenas encendidas y las balizas duro unos 5 minutos aproximadamente. Lo que se le encontró al señor Ponce Posligua era parte de las evidencias. **e.- DEBIENDO RECORDAR LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA QUE ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 11.- DERECHOS.-** EN TODO PROCESO PENAL, LA VÍCTIMA DE LAS INFRACCIONES GOZARÁ DE LOS SIGUIENTES DERECHOS: 1. A PROPONER ACUSACIÓN PARTICULAR, A NO PARTICIPAR EN EL PROCESO O A DEJAR DE HACERLO EN CUALQUIER MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE ESTE CÓDIGO. EN NINGÚN CASO SE OBLIGARÁ A LA VÍCTIMA A COMPARECER sin embargo la misma compareció a fin de colaborar con la justicia y esclarecer los hechos, así como indicio la participación de los hoy procesados. Es por ello, que se hace necesario que el Tribunal se pronuncie por lo manifestado por la defensa tanto en su Alegato de Apertura la defensa del procesado **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL** quien dijo: Hemos escuchado atentamente a la fiscalía quien tiene la carga probatoria y deberá demostrar sin lugar a duda que mi defendido es responsable del delito que se le imputa. El señor como Malave Peñafiel Alberto Francisco goza de su estado de Inocencia. Y como prueba a su favor solicito se recepte el testimonio de **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL (procesado)**, C.C. No. C.I. 0954832515, quien dijo ser de nacionalidad Ecuatoriano, de 27 años de edad, de estado civil Unión Libre de instrucción secundaria; de

profesión u ocupación comerciante, domiciliado en Pascuales Coop. Asad Bucaram Mz. 375 Solar 18 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, quien luego de recordarle sus derechos constitucionales establecidos en el Art. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador rindió su testimonio sin juramento de conformidad al Art. 507 del Código Orgánico Integral Penal el procesado, indico llamarse como lo tiene manifestado, QUIEN SE ACOGIO AL DERECHO AL SILENCIO. Los cuales NO DESVIRTUARON, DESACREDITARON, DESVANECIERON O ENERVARON, LA GRAVEDAD DE LAS PRUEBAS ACTUADAS EN SU CONTRA, POR PARTE DE LA ACUSACIÓN, LOS QUE ADEMÁS SE ENCUENTRAN RELACIONADAS ENTRE SÍ; al respecto Juan Montero Aroca, dice “el ser oído no puede suponer simplemente la posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender los dos elementos básicos de todo proceso: ALEGAR Y PROBAR. Se trata de que tanto el acusador como el acusado han de poder aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo (alegación) y han de poder utilizar todos los medios de prueba legales, pertinentes y útiles para probar los hechos por ellos afirmados (prueba)” (Juan Montero Aroca, Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1997, pág. 141); sin que ello implique que se invierta la carga de la prueba a cargo de la acusación; opinión compartida por Mercedes Fernández López, quien expresa: “la presunción de inocencia garantiza que el acusado no asuma inicialmente carga alguna, sino que es la acusación quien tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sin embargo, una vez que la acusación ha planteado pruebas contundentes de la culpabilidad, la defensa asume la responsabilidad de alegar y acreditar los hechos que puedan evitar la condena o supongan una rebaja de la pena. En este sentido, puede decirse que en el proceso penal se produce una distribución de la carga de la prueba sin que por ello se quiebre o limite el derecho a la presunción de inocencia, cuya principal virtualidad, desde este punto de vista, es la de imponer la iniciativa probatoria a la acusación y exigirle un alto nivel de prueba, de modo que nada prohíbe respecto de la necesidad de que el acusado alegue y pruebe los hechos que pretenda utilizar en su defensa. Lo que ocurre es que, generalmente, esta situación suele reconducirse al derecho del acusado a la contraprueba, pero no hay que olvidar que, en definitiva, se trata del ejercicio de una carga con la finalidad de eludir una sentencia desfavorable”. (Mercedes Fernández López, Presunción de Inocencia y Carga de la Prueba en el Proceso Penal, Pág. 380); en definitiva, LOS MEDIOS PRUEBA DE CARGO DE LA FISCALÍA, SE ENCUENTRAN RELACIONADOS ENTRE SÍ, y de lo analizado se infiere que los referidos acusados ha actuado en evidente ejercicio de sus decisiones de voluntad y conciencia para este fin; es decir, con el designio de causar daño; ya que le era exigible otra conducta, pues se hallaba en posibilidad de dirigir su comportamiento acorde con los requerimientos del orden jurídico y no obró ejerciendo esa posibilidad (Velásquez, Fernando. Manual de derecho penal- Parte general. Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales, cuarta edición, 2010, p. 522); es decir, lo que se conoce como culpabilidad normativa o moderna, que se descompone en tres elementos: 1. Imputabilidad. 2. Conciencia de Antijuricidad. 3. Exigibilidad de otra conducta. (Se reprocha al sujeto activo porque debiendo y pudiendo conforme al querer de la norma, la desobedeció). Es decir, que basta con constatar que los acusados al momento de delinquir eran Mayores de edad; no padecen de alguna alteración mental que bloqueara su capacidad de entender y querer (imputabilidad); que tuviesen conciencia de que cometía un acto prohibido por la ley (conciencia de antijuricidad), y, por último que se encontraban en capacidad y posibilidad de actuar conforme al querer de la norma que violó (exigibilidad de la conducta); que al decir de la teoría de la imputación objetiva -positivizada en los Arts. 22, 25 y 28 del COIP y dentro del capítulo de la Tipicidad (Jorge Zavala Egas, Código Orgánico Integral Penal, Teoría del delito y sistema acusatorio, Pág. 205)-, SE HA GENERADO UN “RIESGO JURÍDICAMENTE DESAPROBADO” O PROHIBIDO; Y, ESTE RIESGO SE HA “REALIZADO EN EL RESULTADO”. (Dr. Manuel Cancio Meliá, Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva, Pág. 422); en virtud de que el procesado ha infringido su rol general de persona, atribuido a todo ciudadano que contiene la obligación originaria de hacer uso de la libertad organizativa sin perjudicar al resto (Jakobs, La imputación penal, p. 7 y ss); es decir, el de no lesionar a los demás en sus bienes -acuñado en el latín con la expresión *neminem laede*- (José Antonio Caro John,

Manual teórico-práctico de teoría del delito, Pág. 182); dado que en el caso in examine, TANTO LA MATERIALIZACIÓN DEL DELITO COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ACREDITADAS MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, PUES ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN DEL NEXO CAUSAL EXISTENTE, SE TIENE QUE EL RESULTADO LE ES IMPUTABLE OBJETIVAMENTE, TODA VEZ QUE LOS PROCESADOS HAN COMETIDO UNA CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE, A TRAVÉS DE SU ACCIÓN, PRODUCIENDO UN RESULTADO LESIVO, DESCRIPTIBLE Y DEMOSTRABLE, LESIONANDO, SIN JUSTA CAUSA, EL BIEN JURÍDICO CONTRA LA PROPIEDAD TOMADA EN SU SENTIDO MÁS AMPLIO, DADO QUE ES IMPUTABLE Y HA ACTUADO CON CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD DE SU CONDUCTA, CON LO QUE HA ADECUADO SU CONDUCTA AL TIPO PENAL DE ROBO, TIPIFICADO Y REPRIMIDO EN EL ART. 189 PRIMER INCISO DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, SIN QUE ADEMÁS EXISTA ALGUNA CAUSA DE INCULPABILIDAD; y, que en esta Sentencia se hacen constar todos los elementos interpretativos en los que el Tribunal se ha basado para fundamentar su decisión, interpretando y aplicando la norma legal constitucional y respetando los derechos fundamentales del procesado. **8.3.- DETERMINACIÓN INDIVIDUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESADO EN LA INFRACCIÓN, EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS PRACTICADAS:** Una vez que se ha establecido los fundamentos fácticos y jurídicos, en donde se ha llegado al convencimiento más allá de toda duda razonable, como estándar probatorio, tanto de la existencia o materialidad de la infracción como de la culpabilidad y por ende responsabilidad al procesado **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, es importante determinar individualmente su participación en el presente injusto penal, y es así que el Art. 41 del Código Orgánico Integral Penal, señala: “Participación.- Las personas participan en la infracción como autores o cómplices”; por su parte el Art. 42 ibídem, señala: “Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: 1. Autoría directa (...) 2. Autoría mediata (...) 3. Coautoría (...)”; con lo que se positiviza, la teoría del dominio del hecho, que es aquella que define al autor como aquel que ejerce el dominio del hecho dirigiéndolo a la realización del delito. Actualmente se entiende que el dominio del hecho asume tres formas diversas: dominio de la propia acción (autoría directa), dominio del hecho a través del dominio de la acción ejecutiva de otro (autoría mediata), dominio conjunto con otro del hecho (dominio funcional del hecho; coautoría). (La teoría del dominio del hecho en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, Pág. 1). Coincidiendo Roxin, que en los delitos del dominio del hecho, se dan de tres formas: como dominio de la acción, como dominio de la voluntad y como dominio funcional. (Roxin, Claus. Autoría y dominio del Hecho en Derecho Penal. Cit Pág. 127). EN EL CASO IN EXAMINE, TODOS LOS TESTIMONIOS RENDIDOS COMO MEDIOS DE PRUEBA DE CARGO, APORTADOS POR LA FISCALÍA, PARA DETERMINAR LA CULPABILIDAD DEL PROCESADO **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, siendo estos: **TESTIMONIOS DEL SGTO.S DE POLICIA VÍCTOR MANUEL ZAMORA PINCAY**, QUIEN REALIZÓ EL INFORME PERICIAL DE RECONOCIMIENTO DE EVIDENCIAS, **SGTO.S DE POLICIA DANIEL VICENTE VERA MORALES**, QUIEN REALIZÓ EL INFORME DE INVESTIGACIONES, **CBO.S DE POLICIA BRYAN GEOVANNY BARZALLO CONDO**, QUIEN REALIZÓ EL PARTE DE APREHENSIÓN, **POLICIA SERVICIO PASIVO JIMMY DUVAL RODRÍGUEZ VILLAFUERTE**, QUE REALIZÓ EL INFORME TÉCNICO PERICIAL BALÍSTICO, **CBO.P DE POLICIA JORGE ANTONIO GUERRERO SERNA**, QUIEN REALIZÓ EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, quienes actuaron en calidad de Agentes Aprehensores y tomaron contacto inmediato con la víctima, constituyéndose en testigo directo a través de sus sentidos); COINCIDEN EN SEÑALAR AL PROCESADO **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, COMO LA PERSONA QUE HA ACTUADO DIRECTAMENTE EN EL HECHO ILÍCITO, DE UN MODO PRINCIPAL, PRACTICANDO DELIBERADA E INTENCIONALMENTE ALGÚN ACTO SIN EL CUAL NO HABRÍA PODIDO PERPETRARSE EL DELITO DE ROBO, tipificado y

reprimido en el Art. 189 primer inciso del Código Orgánico Integral Penal; por lo tanto, ha adecuado su participación en la forma de AUTOR, determinada en el artículo 42 numeral 1 literal a) “Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades: 1. Autoría directa: a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.”. Para Donna existen dos caminos posibles: “a) Se puede considerar autor a cualquier sujeto que haya cooperado de algún modo en el hecho, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre los distintos aportes de los intervinientes. A esta posición responde el llamado concepto unitario de autor. d) La otra alternativa es distinguir varias formas de intervención según el grado e importancia material de los aportes realizados. Desde este punto de vista se procede a diferenciar al autor del resto de los partícipes, atribuyendo aquel carácter sólo a la figura central del hecho”. EN EL CASO IN EXAMINE, TODOS LOS TESTIMONIOS RENDIDOS COMO MEDIOS DE PRUEBA DE CARGO, APORTADOS POR LA FISCALÍA, PARA DETERMINAR LA CULPABILIDAD DEL PROCESADO **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL** EN EL GRADO DE AUTOR DEL DELITO DE ROBO tipificado y reprimido en el Art. 189 inciso primero del COIP; por lo tanto, ha adecuado su participación en la forma de AUTOR. **8.4.- DETERMINACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCESADO AHORA SENTENCIADO ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL** , En esta construcción jurídico-penal de la sentencia condenatoria, una vez que se ha determinado además la participación del procesado en la infracción, en el grado de **AUTOR**, es importante determinar las penas que como consecuencia jurídica de su accionar, le corresponderá cumplir, una vez ejecutoriada la presente sentencia, al tenor de lo dispuesto en el Art. 624 primer inciso y 58, ambos del Código Orgánico Integral Penal. Es así, que la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por el órgano jurisdiccional competente a la persona que ha realizado una conducta punible, acorde con las pautas legales correspondientes (Cuello Calón, Eugenio, La moderna penología, Barcelona, Pág. 16); en este sentido, la tarea básica de la pena es la protección de los bienes jurídicos, para asegurar la coexistencia humana en sociedad, aunque, en alguna medida, también tiene un cometido restaurador del orden jurídico quebrantado por la infracción a la ley penal (Fernando Velásquez V., Manual de derecho penal, Pág. 496); conforme lo reconocen los Arts.: 51, que dice: “La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada”; y, 52, que determina: “Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales”; ambos del Código Orgánico Integral Penal. En ese orden de ideas, el referido Cuerpo Legal, en su Art. 58, señala que las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son: 1.- privativas, 2.- no privativas de libertad y 3.- restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad con este Código. En el caso sub júdice, el injusto penal sentenciado de acuerdo a la acusación fiscal; esto es, el de robo tipificado y reprimido en el Art. 189 primer inciso del Código Orgánico Integral Penal, se encuentra reprimido con pena privativa de libertad de “cinco a siete años”; y así lo expresa el referido artículo, cuando dice: Robo La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”; Respecto a la pena no privativa de libertad, el Art. 60 del referido Cuerpo Legal, señala una serie de penas no privativas de libertad, tales como: “1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual. y (...) 13. Pérdida de los derechos de participación”, en cuyo inciso final, señala: “La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las penas previstas en cada tipo penal”. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en

el Art. 19 primer inciso del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina: “Las juezas y Jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley”; en concordancia con lo dispuesto en el Art. 619 No. 2 parte final del Código Orgánico Integral Penal, que dice: “La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación”; por tales consideraciones, en atención a los principios de: a) Legalidad de la Pena, consagrado en la Constitución de la República, en su Art. 76 No. 3, en concordancia con los Arts. 5 No. 1 y 53, ambos del Código Orgánico Integral Penal; b) Proporcionalidad, consagrado en la Constitución de la República, en su Art. 76 No. 3; y, c) Principio de Culpabilidad, en donde no puede imponerse pena alguna sin culpabilidad, siendo esta el criterio para determinar la pena correspondiente al hecho cometido (MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal Parte General; Edit. Tirant lo blanch; Valencia; 1993; pág. 95), que tiene como colorario el principio del derecho penal del acto, en donde el derecho penal sanciona la conducta no la personalidad del delincuente, reconocido en el Art. 22 segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, que dice: “No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales”; así como por lo previsto en el Art. 54 de la Ley ut supra, que expresa: “Individualización de la pena.- La o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, incluso si son varios responsables en una misma infracción, observando lo siguiente: 1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes. 2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos. 3. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la responsabilidad penal”; consecuentemente el procesado ahora sentenciado **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, cuyo grado de participación es de **AUTOR**, en cumplimiento a lo previsto en el Art.- 623 ibídem, deberá cumplir las penas mínimas de: privativa de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad; esto es: **1.-** Como pena privativa de libertad, LA PENA DE CINCO AÑOS, la misma que deberán cumplirla en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 “Regional Guayas”, de la que se computará en su totalidad a favor de la personas sentenciadas, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de Prisión Preventiva, dictada en el presente proceso, al tenor de lo dispuesto en el Art. 59 del Cuerpo Legal antes mencionado; y, 77 No. 12 de la Constitución que determina: “Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: (...) 12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social (...)”. **2.- LA MULTA DE DOCE SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL**, de conformidad con el Art. 189 inciso Primero del COIP; la que deberá pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutorie, al tenor de lo dispuesto en el Art. 69 No. 1 del Código Orgánico Integral Penal; en la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente No. 750006-8, sublínea 170499, a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (Guayas); y, **3.-** Como pena no privativa de libertad, la determinada en el Art. 60 No. 1, 10 y 13, del referido Cuerpo Legal, siendo ésta: **1.** Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. **10.** Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual. y **13.** Pérdida de los derechos de participación, por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad; al tenor de lo dispuesto en el Art. 64 No. 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 68 del Código Orgánico Integral Penal; por lo que, deberá oficiarse al Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer del particular, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; llevando consigo su interdicción por el mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad, al tenor de lo dispuesto en Art. 56 del Código Orgánico Integral Penal, que determina: “La sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad, mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de disponer de sus bienes a no ser por

sucesión por causa de muerte”. **8.6.- REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA**, de conformidad con los Art. 619 No. 4, 621, 622 No. 6 y 628, todos del Código Orgánico Integral Penal: En cuanto a la reparación integral, desde lo constitucional es una forma de incorporar los valores y principios a la instancia judicial (Criterio esgrimido por la doctora María Fernanda Polo Cabezas, al realizar un análisis constitucional de la reparación integral, Apuntes del Derecho Constitucional, Tomo 2, Pág. 65); más aún, si se considera el marco del Estado constitucional de derechos y justicia, vigente desde 2008, y el paradigma garantista que se erige en nuestra sociedad siendo la reparación integral, vista desde lo legal o constitucional. Por ello, la CIDH, sobre su contenido plantea: “supone determinar cómo se puede restituir a la persona afectada en sus derechos fundamentales, cómo puede el derecho restablecer la situación, no sólo patrimonialmente, sino que integralmente, mirando a la persona como un todo (...) teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad” (Sentencia dictada el 27 de noviembre de 1998, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Párr. 17). Es así que el Art. 78 de la Constitución de la República, señala: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”. La Corte Constitucional en Sentencia No. 004-13-SAN-CC, Caso No. 0015-10-AN, de fecha Quito, D. M., 13 de junio del 2013, publicada en el R.O. Gaceta Constitucional N° 003 - Viernes 21 de junio del 2013, ha señalado: “la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente, es un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los derechos, así, por ejemplo, la obligatoriedad de la reparación para las víctimas de delitos penales (artículo 78)”. Por su parte el Código Orgánico Integral Penal, señala en varias disposiciones este derecho constitucional, tales como: “Art. 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad (...) la reparación integral de las víctimas”; “Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: (...) 2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso”; “Art. 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido”; “Art. 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son: 1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al restablecimiento de los derechos políticos. 2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines. 3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente. 4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 5. Las garantías de no repetición: se orientan

a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género”; teniendo en cuenta que para los efectos de aplicación de las normas de este Código, se considerará VÍCTIMA a las PERSONAS NATURALES o jurídicas y demás sujetos de derechos que INDIVIDUAL o colectivamente HAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO A UN BIEN JURÍDICO DE MANERA DIRECTA o indirecta COMO CONSECUENCIA DE LA INFRACCIÓN; así como a quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o CUALQUIER TIPO DE DAÑO O PERJUICIO DE SUS DERECHOS POR EL COMETIMIENTO DE UNA INFRACCIÓN PENAL; en el presente caso; por tales consideraciones, se dispone la devolución de las evidencias a la víctimas en el presente caso **una vez ejecutoriada la presente sentencia. NOVENO: DECISIÓN DEL TRIBUNAL:** En mérito de lo anteriormente analizado y por cuanto el Tribunal una vez terminado el debate de la presente causa después de deliberar, DE MANERA UNÁNIME, encontró culpable y por ende responsable al procesado **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL**, en calidad de **AUTOR**, del delito de **ROBO** tipificado y reprimido en el Art. 189 primer inciso del Código Orgánico Integral Penal; decisión judicial que se le hizo conocer, al reinstalarse la Audiencia pública de juzgamiento, como lo mandan los Arts. 618 No. 3 parte final y 619, ambos del Código Orgánico Integral Penal; esto es, la referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa, la existencia de la infracción, la determinación de la culpabilidad y por ende la responsabilidad penal del procesado, así como la individualización de la responsabilidad penal y la pena, como la reparación integral de la víctima; con lo que se ha producido el efecto determinado en el Art. 541 No. 3 parte final, ibídem; por lo que, el Tribunal tiene el CONVENCIMIENTO DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA EXISTENCIA O MATERIALIDAD DE LA INFRACCIÓN, Y DE LA CULPABILIDAD PENAL DE LA PERSONA PROCESADA, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, en los referidos: tipo penal y grado de participación; obtenido por las pruebas de cargo aportadas en esta Audiencia Oral de Juzgamiento, por el representante de la Fiscalía, destruyéndose su estatus jurídico de inocencia contemplado en el numeral 1 del Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en concordancia con el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República; y Art. 5 No. 4 del Código Orgánico Integral Penal; en consecuencia se ha cumplido conforme a Derecho, con lo dispuesto en las garantías básicas de los Arts. 11, 76 y 77 de la Constitución de la República; así como con lo estipulado en los Derechos de las Personas, constante en los numerales del Art. 7 referente al Derecho a la Libertad Personal y en los numerales del Art. 8 referente a las Garantías Judiciales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificado por la República del Ecuador; por tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 5 No. 3, 453, 454, 455, 457, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 628; y, 629, todos del Código Orgánico Integral Penal; el Tribunal de Garantías Penales, con sede en Guayaquil **ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA**, declara a **ALBERTO FRANCISCO MALAVÉ PEÑAFIEL** con C.C. No. C.I. 0954832515, quien dijo ser de nacionalidad Ecuatoriano, de 27 años de edad, de estado civil Unión Libre de instrucción secundaria; de profesión u ocupación comerciante, domiciliado en Pascuales Coop. Asad Bucaram Mz. 375 Solar 18 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, **CULPABLE Y POR ENDE RESPONSABLE** del delito de **ROBO** tipificado y reprimido en el Art. 189 primer inciso Código Orgánico Integral Penal; en el grado de **AUTOR** de conformidad con el Art. 42 No. 3 literal a); Consecuentemente se le impone, las penas que las cumplirá una vez ejecutoriada la presente sentencia, al tenor de lo dispuesto en el Art. 624 primer inciso y 58, ambos del Código Orgánico Integral Penal, siendo las siguientes: **1.-** Pena privativa de libertad de **CINCO AÑOS (5) AÑOS, COMO PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, la misma que deberá cumplirla en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 “Regional Guayas”, de la que se computará en su totalidad a favor de la persona sentenciada, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de Prisión Preventiva, dictada en el presente proceso, al tenor de lo dispuesto en el Art. 59 del Cuerpo Legal antes mencionado; y, 77 No. 12 de la Constitución que determina:

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: (...) 12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social (...); **2.-** Se les impone la **MULTA COMO PENA RESTRICTIVA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD, DE DOCE SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL**; la que deberá pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutorie, al tenor de lo dispuesto en el Art. 69 No. 1 ibídem; en la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente No. 750006-8, sublínea 170499, a nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (Guayas); **3.- PENA NO PRIVATIVA DE LIBERTAD**, determinada en el Art. 60 No. 1 y 13, del referido Cuerpo Legal, siendo ésta: **1.-** Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. **10.** Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, telemático o soporte físico o virtual y **13.** Pérdida de los derechos de participación, por el tiempo de duración de la pena privativa de libertad; al tenor de lo dispuesto en el Art. 64 No. 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 68 del Código Orgánico Integral Penal; por lo que, deberá oficiarse al Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer del particular, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 81 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; llevando consigo su interdicción por el mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad, al tenor de lo dispuesto en Art. 56 del Código Orgánico Integral Penal, que determina: “La sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad, mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de disponer de sus bienes a no ser por sucesión por causa de muerte”. **4.-** De conformidad con lo establecido en el Art. 622 No. 6 del Código Orgánico Integral Penal, se dispone como reparación integral, se dispone la devolución de las evidencias a la víctimas en el presente caso **una vez ejecutoriada la presente sentencia**. Oficiase a los señores Director del Centro de Privación de Libertad de personas adultas en conflicto con la Ley, Guayaquil No. 1, Sección Masculino; haciéndole conocer el resultado de este fallo; En atención a lo dispuesto en el Art. 628 No. 4 del Código Orgánico Integral Penal.- Los sujetos procesales: Abg. Nicolas Pulecio Montalvo, Fiscal interviniente, Abg. VALERIA SANTILLAN LOPEZ defensora Publica del procesado Alberto Francisco Malavé Peñafiel, han actuado dentro de las normas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Obténgase copias de la presente Sentencia para que sean incorporadas en el libro respectivo.- Con costas procesales, la denuncia no es maliciosa ni temeraria.- Intervenga en la presente causa el Abg. José Luis Rosales Arciniegas, en calidad de Secretario de este Tribunal de Garantías penales con sede en el Cantón Guayaquil, quien deber dar cumplimiento lo dispuesto por este Tribunal.-NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VIERA ENCALADA NEBEL FABRICIO

JUEZ(PONENTE)

LOGROÑO VARELA EDWIN WALBERTO

JUEZ

CAÑIZARES MERA JOSE ROBERTO

JUEZ